

### **Plan B contra ajustes presupuestales**

De acuerdo con analistas, a la mitad del camino el caballo presupuestal se va a cansar, lo que obligaría a realizar ajustes con énfasis en el castigado gasto corriente, lo que implicaría más despidos de servidores públicos y otro apretón al programa de austeridad. El augurio se centra en la colocación de alfileres en variables como la paridad peso-dólar, el precio internacional del petróleo, las tasas de interés, además de alguna grieta en la recaudación esperada.

Las partidas de apoyo, por ejemplo, para atenuar los boquetes en materia de pensiones para servidores públicos, equivalen a 80% de la recaudación esperada de IVA. Y aunque la estimación de crecimiento económico se ubica en 2%, ésta se supedita a un crecimiento de los montos de inversión privada nacional y extranjera, los cuales a algunos les parecen optimistas.

Sin embargo, la desaparición del ramo 23, tradicionalmente de uso discrecional por el gobierno para apuntalar entidades federativas y municipios por conveniencias políticas, obliga a reforzar y en algunos casos a crear mecanismos eficientes de recaudación interna. Sólo un puñado de ciudades grandes del país cuenta con un catastro confiable para cubrir el impuesto predial, soslayándose la supervisión en otros tributos, como el de nómina.

En paralelo, el gobierno emprenderá una cruzada para realizar reformas que atenúen hacia el futuro el costo de pensiones de servidores públicos, en un escenario en que mientras los bancos de desarrollo permiten jubilaciones a los 20 años de trabajo, en gobiernos estatales se reclama prácticamente el doble. La mayoría de las universidades públicas cuenta con dos tipos de opciones de retiro.

En otra vertiente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planea revisar las inversiones públicas en el extranjero de cara a su utilidad práctica y, desde luego, rendimiento. Las que no reúnan los requisitos serán canceladas, colocando las acciones en el mercado, con cuya venta se amortizaría parte de la colosal deuda pública.

En paralelo, se revisará la factibilidad de los 800 fideicomisos que mantiene el gobierno en bancos de desarrollo, en cuya panza se ubican miles de millones de pesos. El Plan B. Desde el plano de ingresos, la cancelación de la compensación universal evitará sangrías injustificadas, además de apretarse la supervisión sobre grandes y medianos causantes, cancelándose condonaciones.

**No quiso Pemex.** Investigado como presunto omiso en el robo de gasolinas, lo cierto es que el general brigadier Eduardo León Trauwitz, quien llegó a la integración de la subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex con 2014 planteó una estrategia idéntica o similar a la que está aplicando el nuevo gobierno para combatir el ilícito. Esta fue rechazada por la empresa, bajo pretexto de que la legislación no

clasificaba el delito como grave, y que la principal incidencia se daba en áreas donde no podía llegar la subdirección, según ello porque podrían vulnerarse secretos industriales. El militar fue relevado. El cargo lo tenía hasta el final del sexenio el teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña.

**COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ.** Enero 10 del 2019

***El insumo que se acaba: la paciencia***

Cuando a principios de enero del 2017 se consumó la liberación de los precios de las gasolinas, la reacción social y política fue de enojo. Repentinamente, en este país de estabilidad inflacionaria, los precios de los combustibles se elevaban de forma importante sin que el gobierno de Enrique Peña Nieto pudiera atinar a dar una explicación comprensible, de éstas de peras y manzanas, sobre por qué era mejor dejar de subsidiar las gasolinas. Los expertos en propaganda rápidamente posicionaron el término de gasolinazo para describir la acción gubernamental de concretar la apertura del mercado de los energéticos.

A los pocos días del gasolinazo, se empezaron a registrar actos de violencia, saqueos y actos de rapiña, sobre todo en el Estado de México, que aseguraban enarbolar la bandera del enojo social. La realidad es que se veían como grupos no espontáneos, bien organizados, que encontraron una coyuntura ideal para provocar el caos. La prensa dilapidó al presidente Peña Nieto, en especial los que eran claramente afines al ya visible candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Escribían que Peña no había emitido un mensaje sensato, que se aferraba a un discurso de justificación de las acciones emprendidas y a decir que todo era por el bien del país. Eso es cuando había gasolina, cara, pero había.

Hoy son muchas entidades que simplemente no tienen gasolina. La Ciudad de México, que es el epicentro político del país, lleva un par de días con una sensación generalizada de escasez, derivada del desabasto de gasolinas en muchas estaciones de servicio, que han contagiado a la capital de apenas una probada de lo que ocurre en otras entidades. Desde esa visión egocéntrica de la Ciudad de México es fácil perder de vista que hay entidades como Guanajuato, Michoacán o Jalisco que tienen más de 10 días sin combustibles en las gasolineras.

Hay historias humanas terribles, como los que viven de las propinas en las gasolineras, como los taxistas con los coches parados, como los transportistas que no se pueden mover, relatos cotidianos de miles de personas de carne y hueso que hacen ver muy mal las justificaciones políticas del gobierno federal. Vamos a resistir, aunque nos critiquen los adversarios, porque no hay desabasto, sólo un problema de logística de entrega. En fin, una letanía de argumentos desconectados de una realidad que ya deja consecuencias económicas importantes.

Hoy, los mismos opinadores que veían una inhumana conducta de Peña Nieto por liberar los precios de las gasolinas encuentran en la tragedia humana de decenas de miles de personas que no cuentan con estos combustibles, una consecuencia

sólo de la acción de los opositores al presidente López Obrador de enarbolar una bandera opositora. Sin ninguna sensibilidad ante un problema real. Los promotores de los saqueos tras el gasolinazo del 2017 hoy están pasivos, quizá sumisos. Pero eso no implica que no haya un límite en la paciencia ciudadana.

La escasez genera una visión de túnel, donde hay una extrema concentración en la carencia. Esto provoca que una persona duerma en su auto esperando 10 horas por 10 litros de gasolina, cuando quizá puede tomar otras medidas más sensatas. También puede nublar el buen juicio social. El uso político del tema es inevitable ante un gobierno polarizante, pero subestimar el impacto económico y social de este desabasto y su sensación de escasez puede resultar un error más caro para el gobierno federal. [ecampos@eleconomista.com.mx](mailto:ecampos@eleconomista.com.mx)